

La Argentina kirchnerista: entre la “década ganada” y la “década perdida”.

ESTUDIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA

Coordinador:
Martín Schorr

Colección

**ESTUDIOS SOBRE
LA ARGENTINA
CONTEMPORÁNEA**

La Argentina kirchnerista: entre la “década ganada” y la “década perdida”.
Estudios de economía política
Martín Schorr (compilador)



*Se autoriza la reproducción parcial o total,
siempre y cuando sea sin fines de lucro y se cite la fuente*

Diseño de tapa e interior: Limay Uribe Ruberti

Corrección: Martín Ogando y Emiliano López

Editor responsable: Emiliano López

Batalla de Ideas Ediciones

Pasaje Dr. Rodolfo Rivarola 175 - C1015AAA - CABA, Argentina
editorialbatalladeideas@gmail.com

ISBN: 978-987-42-6375-9

Printed in Argentina
Impreso en Argentina, Noviembre de 2017

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Martín Schorr (compilador)

La Argentina kirchnerista: entre la “década ganada” y la “década perdida”. Estudios de economía política.; editado por Emiliano López.

Buenos Aires: Batalla de Ideas Ediciones, 2017.

188 p.; 23 x 16 cm. - (Estudios sobre Argentina contemporánea)

ISBN 978-987-42-6375-9

Fecha de catalogación: 22/11/2017

Índice

PRÓLOGO	7
EL ORDEN SOCIAL KIRCHNERISTA ENTRE LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA. <i>Emiliano López y Francisco J Cantamutto</i>	11
¿LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ? LA RESTRICCIÓN EXTERNA EN EL KIRCHNERISMO. <i>Andrés Wainer y Paula Belloni</i>	51
LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DURANTE EL KIRCHNERISMO: ¿REPRIMARIZACIÓN O REINDUSTRIALIZACIÓN? <i>Agostina Costantino</i>	83
EL PODER ECONÓMICO DE LA ARGENTINA BAJO LOS GOBIERNOS DEL KIRCHNERISMO. UN ANÁLISIS A PARTIR DEL PANEL DE GRANDES EMPRESAS <i>Martín Schorr</i>	117
DE LA PROMESA DEL PLENO EMPLEO A LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE INGRESOS. MERCADO DE TRABAJO Y POLÍTICAS LABORALES EN EL PERIODO KIRCHNERISTA <i>Pablo Ernesto Pérez y Facundo Barrera Insua</i>	163

EL ORDEN SOCIAL KIRCHNERISTA
ENTRE LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA

Emiliano López y Francisco J Cantamutto

Introducción

La acumulación de capital es un proceso eminentemente global, que sin embargo adquiere forma para valorizarse a través de espacios nacionales. Estos espacios adquieren características específicas a través de las relaciones que las clases sociales y fracciones de clase establecen en una coyuntura concreta en función de su articulación con el resto del mundo, donde se definen tanto sus particularidades como mercado pero también como Estado. Los rasgos que definen estos espacios nacionales aparecen por disputas políticas y sociales que exceden “lo económico”, y se expresan en el orden social vigente a través de políticas públicas concretas. La pelea por dar sentido, una cierta coherencia, al programa económico que se estructura desde el Estado, no se agota siquiera allí, pues convergen en ella tanto partidos como organizaciones sociales, medios de comunicación, think tanks, etc., cada cual presionando con interpretaciones y demandas propias.

Este capítulo busca dar cuenta de este proceso para la Argentina emergente en 2002: ¿existió un modelo de desarrollo, o se trató de una suma de medidas dispersas? ¿Quiénes fueron los principales ganadores, quiénes los sectores dirigentes, y quiénes perdieron? Otros capítulos de este libro se abocan a aspectos ligados a estas preguntas, ofrecemos aquí un recorrido que combina herramientas de la economía política latinoamericana con el análisis de procesos políticos.

Vale la pena señalar que, ni aun contando con la ventaja del tiempo transcurrido, queda una definición cerrada respecto de cuál fue exactamente el proceso económico-político, pues la disputa en el presente por una interpretación del pasado es una pelea política por el futuro. Las versiones más prosaicas -en clave de divulgación- proponen cerrar el debate con una caracterización de algunos protagonistas políticos, con la apropiación privada de bienes públicos como eje. Las acusaciones mutuas se superponen, con diverso nivel de justificación y credibilidad, pero con el punto en común de su escasa capacidad de explicar qué ocurrió en la sociedad argentina. Estas interpretaciones terminan asumiendo que el pueblo (o la ciudadanía, según las preferencias teóricas) es engañado, o es incapaz de discernir qué es mejor para sí. La mirada que proponemos -en el capítulo y en el libro- no se sitúa en esa

clave. Entendemos que los procesos sociales están signados por el conflicto y la gestación permanente de nuevos, precarios acuerdos.

El camino que proponemos es identificar las fuerzas sociales en pugna, sus demandas y recursos, así como los resultados obtenidos en términos de políticas y procesos económicos. Comenzamos con la caracterización de la emergencia de un nuevo orden luego de la crisis neoliberal, indicando las posiciones del Bloque en el Poder (BeP) y el rol de las organizaciones populares en la disputa por el orden social, y su relación con las principales políticas económicas. Luego abordamos el cambio que se manifestó luego del "conflicto del campo" en el 2008 y el devenir de una nueva identidad política (el kirchnerismo) que, en el mismo movimiento de su constitución como tal produjo sus propias tensiones que llevaron al ocaso de su proyecto hegemónico. Por último, presentamos algunos comentarios finales.

LA EMERGENCIA DEL NUEVO ORDEN

A diferencia de las lecturas celebratorias del proyecto kirchnerista, ubicamos la emergencia del nuevo orden societal en la Argentina -desde una lectura que incluye el plano económico y político de manera dialéctica- en el año 2002, considerándolo un punto de inflexión. Esto se debe a un punto clave de nuestra lectura del período: no puede comprenderse el proceso que implicó en términos económicos y políticos el kirchnerismo sin dar cuenta de las correlaciones de fuerzas, las negociaciones partidarias y los cambios en la política económica concreta que se produjeron en la crisis del neoliberalismo.

Es decir, el 2002 es a la vez punto de partida de un nuevo orden y un punto de llegada: el momento que completa la crisis del orden neoliberal. Se vuelve, por tanto, imposible comprender la etapa emergente sin identificar con precisión sus puntos de continuidad y quiebre con la anterior. Sin adentrarnos aquí en el debate específico, es relevante señalar que entre 1991 y 2001 existió un régimen político-económico con cierta coherencia, que ordenó la acumulación y disputas en la Argentina: la Convertibilidad.

Las tensiones de dicha etapa previa, que habían menguado entre 1995 y 1999, tendieron a intensificarse a partir de allí. La protesta organizada y el estallido social obligaron a renunciar al ministro de economía Cavallo y luego al propio presidente De la Rúa, en el caluroso diciembre de 2001. Tras una veloz sucesión pautada en el Congreso, por falta de vicepresidente (Carlos Álvarez había renunciado hacía meses, sin reemplazo), asumió la presidencia temporal el gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá. Aunque contaba con escasos apoyos polí-

ticos, incluso en su propio partido (el Partido Justicialista), Rodríguez Saá decidió tomar la tarea de reconstruir el poder político del gobierno, adoptando una impronta de veloz y decidido gestor.

Su discurso de asunción tuvo varios elementos remarcables, que incluían la necesidad de renovar la alianza social que gobernaba el país, dando paso a una nueva generación, más comprometida éticamente, y más ligada a la producción, en lugar de la especulación. Entendía el novel presidente que de allí vendría el empleo, fuente de bienestar. Con este esquema de ideas, anunció la creación de un millón de empleos. Su agenda incluyó reuniones con dirigentes piqueteros y con organizaciones de Derechos Humanos, un gesto de renovación política muy relevante en relación a la década previa. Con un cerrado aplauso en el Congreso y entonando la marcha peronista, Rodríguez Saá anunció una nueva etapa que se abría paso, en especial al reconocer explícitamente la cesación de pagos de la mitad de la deuda -que para entonces era en rigor ya un hecho.

Tras otra veloz sucesión tras bambalinas, fue Eduardo Duhalde quien asumió la presidencia temporal el 1 de enero de 2002, y con él se dio un nuevo salto en la construcción del nuevo régimen. Aunque disputado intensamente en cada punto, las políticas públicas puestas en marcha fueron estructuradas como un programa -según el entonces ministro Remes Lenicov aseguraría. Con mayores contrastes en relación a los gobiernos previos, Duhalde habló explícitamente de “una alianza productiva que construyera una nueva Argentina, tras el infierno dejado por la especulación neoliberal”. La propuesta parecía sencilla: de la producción se crearía el empleo, y en esta tarea, era el sector industrial el principal agente. ¿Cuál fue el nuevo conjunto de políticas? La mayoría surgió de la ley de Emergencia Económica (N° 25.561) y sus modificatorias:

- **La devaluación:** primero buscando una paridad fija de \$1,4 por dólar, luego liberando la cotización, que -tras alcanzar casi \$4- terminó estabilizándose en torno a algo menos de \$3. Significó el final de la paridad y de la caja de conversión, y sus principales efectos fueron generar un aumento de la competitividad externa de la economía, así como desatar una intensa inflación (circa 40% minorista, 118% mayorista), en ambos casos pulverizando el salario real.

- **La aplicación de derechos a la exportación:** como mecanismo para contener el traslado a precios de la devaluación y para hacerse de recursos fiscales, se aplicaron retenciones del 10% para los productos primarios y 5% a manufacturas, gas y electricidad (hubo un intento de aplicar a la exportación de petróleo, que por presión de las empresas, cayó en saco roto).

- **Pesificación asimétrica:** el gobierno transformó a pesos los depósitos (\$1,4 por dólar) y las deudas (\$1 por dólar) con el sistema financiero local (Decreto 214/02), actualizando ambos montos por un índice de ajuste ligado a la inflación (el Coeficiente de Estabilización de Referencia). La pesificación buscaba destrabar tanto la presión de los ahorristas por retirar sus depósitos, como el ahogo financiero de diversos sectores productivos, así como la falta de dólares del propio sistema financiero. La asimetría resultó del juego de presiones del momento, y los bancos fueron compensados por esta diferencia (con BODEN), lo que constituyó una enorme transferencia de fondos. Los ahorristas que querían optar por cobrar en la moneda original, debían aceptar bono ad hoc con vencimiento extendido.

- **Pesificación de las tarifas de los servicios públicos:** se acababa así el privilegio de este sector, que indexaba por inflación estadounidense sus precios durante la Convertibilidad. En la ley de Emergencia se habló de una profunda revisión de los contratos -laxos y aun así incumplidos-, que ante la presión de las empresas con denuncias en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, convencieron al presidente de enfocarse en evitar grandes subas (los decretos N° 120 y 146 otorgaron subas del 10% en electricidad y gas). Se congelaban así las tarifas, lo que contenía parte de la angustia social, pero sobre todo subsidiaba la tasa de ganancia de la industria, usuario intensivo de estos servicios. A cambio, las privatizadas recibieron transferencias económicas, cuyo peso crecería en las cuentas fiscales.

- **Masificación de la política social:** además del plan de Emergencia Alimentaria, se transformó al Plan Trabajar en el nuevo Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, por el cual se pagaban \$150 por mes a desocupados/as con hijos/as a cargo, a cambio de una contraprestación laboral o de formación. Pensado en un principio como contención social por tres meses, su ampliación llegó a casi dos millones de beneficiarios para fines de 2002. Sin ser un ingreso universal -como había demandado el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO) en 2001, se trató de una muy significativa expansión de la política social.

- **Mesas de Diálogo Social:** se trató de la convocatoria a los sectores corporativos para la toma de decisiones de política pública con carácter vinculante, una forma muy novedosa de construir legitimidad para un gobierno no electo por el voto. Esta vía de canalización del diálogo fue promovida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Iglesia católica. Se incluían organizaciones empresariales sindicales, algunas pocas piqueteras y ecuménicas, y de allí surgieron tanto las políticas referidas en el inciso anterior, como los acuerdos sobre

aumentos de sueldos en 2002 y 2003.

- **Represión:** el gobierno combinó los mecanismos de diálogo social y contención mediante política social con una intensificación de la represión a la protesta. El punto más alto de esta escalada fue la masacre de Puente Pueyrredón (en Avellaneda), donde se asesinó a sangre fría a dos militantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en una manifestación realizada el 26 de julio 2002. En total, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) calcula en 244 las muertes causadas por la represión de fuerzas estatales durante los gobiernos de Rodríguez Saá y Duhalde. Esto expresa de manera contundente la limitación de los presidentes no electos, y en los hechos, obligó a acelerar el llamado a elecciones.

Como ha sido mencionado, el marco de emergencia de este nuevo orden ocurrió con una sucesión de gobiernos no elegidos por el voto. La crisis del sistema político atravesaba todas las estructuras, y de hecho, incluso con la creciente relevancia del peronismo en esos años, ni el PJ pudo presentarse unificado en las elecciones presidenciales de marzo de 2003, y llevó como candidatos en diferentes partidos a Rodríguez Saá, Kirchner y Menem.

El último se impuso en primera vuelta (24,5% de los votos), con propuestas de radicalización de la Convertibilidad -que incluían referencias a la dolarización de la economía. A ello se suma, que la candidatura del ex ministro de la Alianza UCR-Frepaso López Murphy alcanzó el 16,4% de los votos, lo cual muestra que dos quintos de la población avalaban propuestas abiertamente conservadoras y liberales en su *demandas de orden*. Este dato sería central para el gobierno siguiente.

Rodríguez Saá y Kirchner, en cambio, presentaban un discurso de continuidad respecto del giro nacional productivo iniciado con la presidencia interina del primero. Pero Kirchner contaba con algunas ventajas: por un lado, su figura no era muy conocida en el electorado de entonces (venía de gobernar la provincia de Santa Cruz, la menos poblada del país), apareciendo como un relativo *outsider* político, pero por otro lado, era el candidato de Duhalde (tras la negativa de Reutemann y De la Sota), compartiendo incluso parte del equipo (Lavagna, Aníbal Fernández, Ginés González, Daniel Scioli y José Pampuro). En tal sentido, Kirchner presentaba la continuidad de las políticas públicas recientemente aplicadas pero con mayores chances de lograr gobernabilidad: salió segundo, con el 22,2% de los votos. Menem abandonó la segunda vuelta, sabiéndose perdedor de antemano, y dejando a Kirchner con un difícil desafío de construir gobernabilidad con casi la mitad de los votantes apoyando a través de la vía electoral otro modelo -de continuidad al de la Convertibilidad- y una fuerte pérdida de legi-

timidad del sistema político.

Desde su discurso de asunción el 25 de mayo de 2003, Kirchner enarboló las banderas de su predecesor, llamando a reconstruir un capitalismo "serio, normal", que en su visión se asociaba a la producción y el empleo, garantizados por un Estado presente. Ahora bien, en la elusiva búsqueda de legitimidad, contando con apenas una minoría de votos a favor, tomó la demanda de normalización y orden, aplicándola a algunos temas candentes: concretamente, redujo la cantidad de integrantes de la Corte Suprema (y presentó para integrarla a nuevos candidatos con gran consenso) e intervino el PAMI, que venía de escándalos de corrupción. Pero también retomó -y llevó más lejos- el ejemplo de Rodríguez Saá, incorporando el problema de los derechos humanos, dañados por los gobiernos previos.

Este fue un punto de inflexión en la construcción de apoyos: la incipiente articulación de la cuestión de los Derechos Humanos como política de Estado: en agosto de 2003 se aprobó el proyecto de la diputada del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Patricia Walsh (ley N° 25.779) para la anulación de las leyes de Punto final y Obediencia debida. Esto daría inicio a un amplio proceso de juicios por los crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles según los convenios internacionales ratificados por el país, lo que le permitió ganar un fuerte apoyo por parte de las organizaciones de DDHH y sectores progresistas. Kirchner sostenía que se trataba de reconstruir la patria -amenazada desde adentro- en una democracia real, sustantiva.

El neoliberalismo era responsabilizado como fuerza contraria a esta promesa de plenitud, y los actores que lo encarnaban podían cambiar según la ocasión: las corporaciones, los militares, el capital especulativo, etc. El neoliberalismo era leído en dos tiempos: como el régimen de políticas de la Convertibilidad, pero también como la trayectoria inaugurada con la dictadura militar de 1976. Esto permitía recuperar el discurso construido por organizaciones como HIJOS o la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), donde la vulneración de los derechos sociales y económicos era homologada en una continuidad trazada por la exclusión a las clases populares.

Kirchner también retomó la senda de Duhalde respecto del "segundo circuito representativo", convocando a las organizaciones corporativas a reanimar las negociaciones colectivas de trabajo y rehabilitando al vetusto Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (ver capítulo 5). Todo el conjunto de instrumentos y políticas referidos sirvieron para que Kirchner construyera legitimidad luego de ser electo. El dispositivo final para reordenar este proceso fue la idea de transversalidad, como un espacio nuevo, que superara las barreras "sectarias" de los partidos bajo un ideario de centroizquierda, pluralismo y democracia, contra-

rio al neoliberalismo y la “vieja política”. Se orientó en dos planos. Por un lado, como nucleamiento de organizaciones sociales, que permitió la confluencia de aquellas que reconocían un cambio en el gobierno que merecía apoyos explícitos de su parte. Por otro lado, como alianza de partidos, reanimaba una nueva idea de política, a la vez que permitía superar el escollo de no controlar el PJ. Este último aspecto se modificaría después que en 2005 Cristina Fernández de Kirchner derrotara a Hilda González de Duhalde en las elecciones legislativas.

Quizás la última gran política consolidada en esta primera etapa fue la reestructuración de la deuda. Siguiendo también en esto la lógica de Duhalde, de pagar la deuda sólo hasta donde fuera compatible con la producción, el presidente lanzó una primera propuesta de canje de la deuda en mora en la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Dubai a fines de 2003. El canje se logró cerrar -levemente modificado- entre enero y marzo de 2005. La gran novedad era un rendimiento extra, atado al crecimiento del PBI: ésta fue la forma concreta de hacer a los acreedores “socios del crecimiento” de la Argentina. Aunque la propuesta involucraba una quita sobre el principal de los bonos, se reconocían parte de los intereses impagos y punitivos, a los que debe sumarse el bono PBI, dejando un resultado neto donde la merma parece más bien exigua. De hecho, los acreedores apoyaron en su mayoría la propuesta: el 76% de la deuda en mora (US\$62.300 millones) fue regularizada. La gran victoria de esta operación fue negar -una vez más- la auditoría de la deuda, justo cuando el país no requería de nuevos préstamos, contaba con jurisprudencia al respecto y una fuerte demanda social. Hacía así su aparición la política de “desendeudamiento”, que generó no pocas confusiones, exagerando una pretendida confrontación con las finanzas globales.

En el marco internacional, el gobierno de Kirchner se inscribió en una retórica novedosa, que revalorizaba las relaciones latinoamericanas -frente al globalismo sin atenuantes de la década previa-, y se inscribía de hecho en un cambio del escenario regional, con el ascenso de gobiernos que -de diferentes formas- recuperaban demandas y discursos contrarios al neoliberalismo e incluso recuperando el repertorio de discursos de la izquierda latinoamericana. Fue, en este sentido, el período de mayor unidad continental con una perspectiva progresista. Sin embargo, el gobierno no articuló estructuralmente un nuevo rumbo en las relaciones internacionales: a pesar de las críticas al neoliberalismo, no solo se mantuvo la presencia en organismos claramente representativos de ese esquema de políticas (el CIADI del Banco Mundial o el propio FMI, al que se apostó a “renovar”) o la validez de los tratados de inversión de la década previa, sino que no hubo alternativas en relación al modelo de integración regional. El MERCOSUR, aunque

con algunas nuevas agendas, no vio alterada la esencia de su legado previo de apertura por etapas; tanto así que hasta 2005 se lo veía como una posible pieza de un Área de Libre Comercio de las Américas en una versión *light*. La negativa a desarrollar alternativas de integración -como el ALBA, el Banco del Sur o el Sucre, por referir a las existentes- tendría por efecto sostener sin mayores cambios la inserción externa de Argentina (ver capítulo 2).

Con estos múltiples apoyos, la propuesta del capitalismo "serio" del kirchnerismo parecía funcionar. Como efecto de las políticas descritas antes en esta sección, resumidos como "superávit gemelos" (el fiscal y el externo), la actividad económica mostró un crecimiento inusitado, con ciertas modificaciones en la composición sectorial pero sin cambios estructurales (ver capítulo 3), reduciendo los altos niveles de desempleo, pobreza e indigencia del final de la Convertibilidad. Se trató de la fase exitosa del "modelo", no solo en lo económico sino en términos de la constitución de una hegemonía política. Las elecciones presidenciales de 2007 expresaron este consenso, consagrando ganadora la fórmula "transversal" de Cristina Fernández y Julio Cobos (UCR) con el 46,3% de los votos. Pero muy pronto vendrían las complicaciones.

Características del BeP

La Convertibilidad logró consolidarse como régimen de políticas, entre otros motivos, porque ofreció oportunidades al conjunto del BeP, que se expresó en la poderosa alianza conocida como G8. Las privatizaciones fungieron como gran prenda de cambio para convencer a díscolos y temerosos de la apertura. Sin embargo, a medida que las contradicciones se intensificaban, y los recursos enajenables escaseaban, comenzó a hacerse más explícita la tensión entre fracciones del capital.

Ya desde 1998 empezaron a aparecer críticas. Las fricciones internas de los capitales concentrados se expresaron en la aparición pública del autodenominado Grupo Productivo (GP), que reunió a la Cámara de la Construcción y a Confederaciones Rurales Argentinas bajo el comando de la Unión Industrial Argentina (UIA). La Sociedad Rural fue invitada a formar parte de la alianza, pero declinó la oferta. En los hechos, esto implicaba un cuestionamiento *por arriba* al "modelo", delineando ya la idea de lo "productivo" como opuesto a lo "especulativo", adelantando así elementos clave del discurso de Rodríguez Saá, Duhalde y Kirchner. Aunque sus intervenciones públicas siempre cuidaron de defender la Convertibilidad, propuestas como el ajuste de la paridad mediante una canasta de monedas o la crítica por superficiales a las tres reestructuraciones de deuda, implicaban poner en duda al con-

junto de las políticas.

La propia aparición de este agrupamiento produjo un movimiento simétrico dentro del G8, que acercó a otras fracciones al gobierno. Concretamente, se consolidó el diálogo privilegiado con la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) -que nuclea la banca privada, con presencia mayoritaria extranjera-, con las privatizadas, la Cámara Argentina del Comercio y la Sociedad Rural. Este fue el núcleo de organizaciones corporativas que se reunía a puertas cerradas y en actos públicos con el gobierno, insistiendo en un diagnóstico diferente del problema económico: el origen de los males provenía del elevado gasto público, que obligaba a elevar la presión tributaria, erosionando la rentabilidad empresarial. Por supuesto, esto se presentaba además con cuestionamientos a la corrupción asociada, de manera excluyente, al Estado.

El gobierno de la Alianza tomó este diagnóstico como propio. Aunque obtuvieron algunos éxitos en materia de desgravación, sus respuestas en términos de reactivación de la actividad y del empleo fueron escasas. Esto ponía en aprietos al gobierno, que reaccionaba incluso de maneras contradictorias, como por ejemplo con la aplicación del impuesto al cheque, en el marco de los tres canjes que llenaron las arcas de los acreedores -foráneos y locales. En un escenario de recesión, esto significó una creciente exclusión del diálogo con las clases populares, pero también con aquellas fracciones del BeP que empezaban a cuestionar las políticas estatales.

El estallido del modo de desarrollo neoliberal en diciembre de 2001 encontró a las asociaciones señaladas defendiendo al gobierno hasta el minuto final, quizás incluso algunos minutos después. En cambio, el GP había dado varios pasos en otro sentido, reuniéndose con diversos sectores para presionar por sus demandas, pero también incorporar ajenas. En ese camino, fueron capaces de articular a un sector de las finanzas, a través de ABAPPRA -representante de los bancos públicos y cooperativos. Pero más aún, lograron acercar posiciones con la Confederación General del Trabajo (CGT), tanto oficialista como sectores críticos (el Movimiento de Trabajadores Argentinos, MTA), que comenzaron a enarbolar con gusto la bandera de la producción nacional. Esto produjo cambios en el programa del GP, que fue presentado públicamente apenas caído el presidente De la Rúa. Se pedía allí la devaluación, moratoria de la deuda por un año, pesificación de las tarifas, pero también creación de empleo y la necesidad de una política social.

Como ya referimos, el gobierno de Rodríguez Saá y el de Duhalde tomaron este programa como una guía de acción. Duhalde incluso creó el Ministerio de la Producción, entregado al entonces presidente de la Unión Industrial, Ignacio de Mendiguren. Los sucesivos ministros de

Economía, Remes Lenicov y Lavagna después, eran viejos asesores de la UIA: se trataba de la presencia explícita de funcionarios ligados a la nueva fracción dirigente del BeP. Y este sería uno de los problemas para su propia continuidad: por un lado, porque intensificaba la tensión con el resto de la clase dominante, y por el otro, porque también hacía expresa la exclusión de las clases populares.

Respecto de esto último, como señalamos, la imposibilidad de construir legitimidad llevaría a adelantar las elecciones. En el caso del BeP, el acercamiento clave estuvo en la constitución de la Asociación de Empresaria Argentina (AEA) en mayo de 2002, una entidad destinada a representar a las grandes empresas a través de una alianza transversal a los sectores de actividad. Su expresa finalidad era "*insertar a la empresa privada en la sociedad*" ante la preocupación por un discurso "antiempresarial", y que por ello "*no se dedicarán a defender intereses sectoriales, sino las bases mismas del sistema capitalista como aporte a la reconstrucción del país*".

La llegada al gobierno de Kirchner permitió relegar las disputas internas al BeP, desplazando relativamente la presencia explícita de los dirigentes industriales -primero se eliminó el Ministerio de la Producción, luego se reemplazó a Lavagna. Las dos políticas económicas clave posteriores a 2003 contaban con el acuerdo expreso de la mayor parte de las asociaciones empresariales: la renegociación de la deuda y los mecanismos de negociación colectiva con la clase trabajadora. Por extraño que parezca esto último, hay que señalar que fue el propio empresariado que demandó estos mecanismos: a la vista de la reanimación económica, y la inminente recuperación del empleo, preferían contar con un instrumento para negociar de manera pautada los incrementos de salario, que enfrentar una disputa mediante huelgas y movilizaciones. Se trataba de canalizar el conflicto, y funcionó: a pesar de los sistemáticos pedidos de la CTA por llevar el salario mínimo al nivel de la canasta de pobreza, se lograron aprobar una y otra vez incrementos por debajo de esa línea, convalidados por la dirigencia.

Así, se erigió una nueva conformación del BeP. El conjunto de las fracciones ligadas a la producción de bienes se vieron beneficiadas por un nuevo esquema que les permitía rehabilitar la acumulación (ver capítulo 4). Ahora bien, a su interior, no todas ocupaban el mismo rol político, y esto es relevante.

Por un lado, la industria manufacturera logró no solo un esquema de políticas públicas que organizaba transferencias para garantizarle ganancias (caída del salario real, las tarifas y del costo financiero, y mayor protección externa), sino que ocupó el centro de la escena con sus demandas y discurso. Es por eso la *fracción dirigente* de la etapa, que logró estructurar la reproducción de la sociedad bajo la forma de sus propias características (que, veremos más adelante, mantenían sus

sesgos de dependencia). Por otro lado, las fracciones agropecuarias, a pesar de recibir una parte de esos beneficios -licuación de deuda e incremento del tipo de cambio-, fueron relegadas en el plano político, y se les obligó a transferir parte de la renta extraordinaria para garantizar la valorización de otras fracciones. A pesar de su creciente poder estructural, su marginación política las ubicó como *fracciones “desgarradas”*. En un espacio intermedio estuvieron los capitales ligados a la minería, que intensificaron sus negocios sin que su rol se viera cuestionado. Finalmente, un conjunto de fracciones del BeP se vio desplazada económica y políticamente, pero recibió a cambio cuantiosas compensaciones: las privatizadas y las finanzas.

El nuevo esquema de políticas buscaba garantizar un conjunto de transferencias que ordenaran la valorización del capital. La gestión de ese orden (la política) requirió intervenciones sistemáticas del Estado, arbitrajes entre partes (incluyendo fracciones del BeP). Esto es lo que muchos intelectuales, militantes y el propio gobierno celebraron como “recuperación de la política”. Sin embargo, esto atentaba contra otra gran demanda del conjunto del BeP, que era la recomposición de la previsibilidad: requerían un marco de estabilidad pactado, que funcionara como horizonte de regulación a futuro, previsible; las políticas públicas no podían depender del arbitraje estatal contingente.

Esto fue exactamente lo que Cristina Fernández recuperó en la campaña presidencial, llamando al Pacto Social, y luego en el inicio de las sesiones del Congreso en 2008, proponiendo lograr los “Acuerdos del Bicentenario”. Pero las fracciones desgarradas no encontraban esta propuesta satisfactoria, y esto estallaría rápidamente en 2008, a raíz de un intento de aplicar retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias. El conflicto fue profundamente político: el capital agrario concentrado podía soportar el impacto de este aumento tributario, la cuestión no era tanto su peso económico como el poder de determinar los usos del plusvalor apropiado por el capital de conjunto.

Clases populares en la disputa

Tras los picos hiperinflacionarios, el orden neoliberal encontró el eje de su legitimidad en la estabilidad, sin relación con lo que ocurriera por ejemplo con el empleo o la inclusión. Lo hacía en virtud de los antecedentes hiperinflacionarios y esta tendencia fue haciéndose cada vez más manifiesta. Hacia 2001 se profundizó la pauperización de la vida cotidiana (y la represión), lo que diluyó la base de un consenso negativo que era el último sostén del orden neoliberal: la idea de que cualquier alternativa era peor. Esto no significa que existiera una interpretación ya construida: de hecho, el esfuerzo era organizar

esas alternativas, y esto incluía tanto a las organizaciones de clases populares como las del BeP. Sintética y esquemáticamente, se pueden proponer cuatro articulaciones en ciernes desde los sectores populares en el ocaso del orden neoliberal:

- La que protagonizaban las diferentes expresiones del espacio piquetero, que confluían en las acciones públicas disruptivas, y procuraban alianzas programáticas. En junio y septiembre de 2001 se realizaron los dos Congresos Nacionales Piqueteros, que incluyeron la participación tanto del futuro Bloque Piquetero Nacional (llamados "piqueteros duros" más tarde) como la "alianza matancera" de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Las demandas de trabajo digno, de planes sociales como paliativo, y el reclamo contra la criminalización de la protesta pueden presentarse como los ejes básicos;

- La confluencia programática del Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO), que fue liderada por la CTA, e incluía organizaciones territoriales como la FTV y Barrios de Pie, defensoras de DDHH (incluyendo Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales) e incluso asociaciones representativas del mediano capital (Federación Agraria y APYME). El FRENAPO impulsó un Seguro de Empleo y Formación de \$380 para los jefes de hogar desocupados, una asignación universal de \$60 mensuales por hijo para todos los trabajadores (desocupados, estables o precarizados), y otra semejante para adultos mayores. Una novedad relevante, pues se planteaba en términos universales de derechos por ciudadanía. Una consulta popular de estas propuestas realizada en diciembre de 2001 permitió a 3.083.191 personas expresar su opinión, ampliamente favorable;

- Una confluencia pragmática en la protesta callejera entre la CTA y el MTA liderado por Hugo Moyano, contra la lógica del ajuste social (realizaron nueve paros generales en esos años), reclamando una distribución más justa del ingreso, que incluyera mejoras salariales.

- El acercamiento ya referido entre el MTA y el GP, en lo que Moyano llamó a un "Frente Nacional, Social y Productivo", que incluyó esporádicamente a la propia CGT. Juntos, firmaron diversos documentos y tuvieron reuniones con el gobierno (incluso en el álgido diciembre de 2001), para impulsar un nuevo modelo económico, ligado a la producción industrial y la subsecuente generación de empleo como mecanismo de redistribución. Como se puede notar, los espacios de articulación eran múltiples. Si bien había espacio de contacto para sus demandas, las identidades y estrategias de los actores involucrados ponían límites a la confluencia. Las agrupaciones de izquierda silbaron a Moyano en el primer Congreso Piquetero, y se distanciaban tam-

bién de la iniciativa del FRENAPO, que incluía partidos de centroizquierda como el ARI, el socialismo y el Polo Social. La propuesta del MTA de redistribución basada en la condición de ocupación (distinta de la propuesta del FRENAPO, basada en la condición de ciudadanía) era la base sobre la cual pudo confluir con el programa que el GP iba configurando. Este último se distinguió del resto del BeP y elaboró una narrativa en la que la idea de la industria se asociaba al desarrollo productivo del mercado interno, lo que redundaba en mayor empleo, y causaba mayor bienestar a toda la Nación.

Un problema de difícil resolución era lograr traducir este programa en la representación de un partido político, en el marco de una profunda crisis institucional. Esto favoreció la confluencia en las calles de diferentes sectores sociales, terminando como una insurrección popular, con consignas como “Piquete y cacerola, la lucha es una sola”. Aunque el estallido social del 19 y 20 de diciembre tuvo un componente espontáneo, el vaciamiento del “modelo” y las demandas puestas en debate traían un largo recorrido. En buena medida la capacidad destituyente de las organizaciones populares no tuvo un correlato instituyente del mismo tenor, sino más bien apuestas políticas dispersas.

La reactivación de la economía desde mediados de 2002, con incipiente reanimación del empleo, y los mecanismos de institucionalización del diálogo social, sembraron dudas en la caracterización del Estado que hacían las organizaciones populares. Cuando Kirchner incorporó los DDHH a su programa y lanzó la transversalidad, el mapa de la movilización se terminó de modificar. Mientras que el Estado había sido garante explícito de la exclusión, un enemigo claramente exterior para las organizaciones populares, ahora el gobierno ya no parecía ocupar ese mismo lugar, y en todo caso, pasaba a estar en disputa, a ser un espacio de batalla. Aunque diversas organizaciones mantuvieron su distancia crítica, era difícil desconocer que el rol, las políticas y el discurso del gobierno habían cambiado.

Con el acto fundacional de Parque Norte en junio de 2004, aparece una de las grandes novedades del período: las manifestaciones de organizaciones populares en apoyo al gobierno. La posibilidad de participar del Estado en calidad de representantes o funcionarios (que en cualquier caso, fue escasa en este período) implicó un fuerte proceso de redefinición de interpretaciones sobre el proceso político. No pocos sectores -por derecha y por izquierda- interpretaron esto como una simple cooptación, la compra de voluntades: sin embargo, persiste como duda por qué la preexistencia de planes sociales -incluso en niveles de masividad superiores- no había logrado el mismo efecto antes, ni por qué no todas las organizaciones que aceptaban planes interpretaban el proceso en un mismo sentido.

Las concepciones político ideológicas de los movimientos tuvieron una influencia categórica en la decisión de acercarse o no al gobierno, destacándose incluso diversos grados de autonomía en esta aproximación. Ante este movimiento "hacia el Estado", las agrupaciones piqueteras ligadas a la izquierda tradicional y la emergente izquierda independiente se dispersaron en diversas organizaciones, asediadas por la política de "ni palos ni planes". Por el lado del sindicalismo, el gobierno revalorizó el lugar de la dirección sindical tradicional en las negociaciones (logró impulsar la reunificación de la CGT, promoviendo el liderazgo de Moyano), y dio un lugar menor -pero un lugar al fin- a la CTA en los mecanismos de negociación.

Así, aislando los sectores más críticos, sin recurrir de manera sistemática a la represión, el gobierno procedió a sumar a través de gestos, políticas y discursos. Esto llevó algunos cambios de posiciones impensables en menos de un lustro. La negociación de la deuda es un buen ejemplo de esto, dado el rol central que cumplía en las demandas del capital concentrado y la denuncia explícita que de ella se hiciera durante la Convertibilidad. A pesar de ello, el canje de 2005 y más aún el pago al FMI de la deuda ilegal e ilegítima, fueron celebrados por dirigentes sociales como un logro propio. El gobierno había completado el viraje iniciado por la UIA: *cubrir de consenso popular un programa estructurado según las necesidades de parte del BeP.*

Por supuesto que el consenso jamás es total, pero ciertamente era novedoso que organizaciones populares interpretaran el proceso como beneficioso para sus demandas. Vale resaltar que 2005 fue uno de los últimos grandes eventos de confluencia de las organizaciones populares, con la Contracumbre de Mar del Plata, donde el ALCA quedó enterrado. A partir de allí, las discrepancias solo se intensificarían.

EL KIRCHNERISMO COMO IDENTIDAD POLÍTICA

De la situación de 2002, con recesión, reducción de salarios reales cercana al 30%, caída de la participación de los asalariados en el ingreso (7 puntos del PBI, aproximadamente) y un desempleo superior al 20%, se pasó a una situación de recuperación de estas variables a niveles similares a los previos a la devaluación del peso. Sin embargo, esa primera etapa de construcción de consensos políticos y expansión económica tuvo un quiebre en 2008. Aunque los indicadores económicos y sociales aun mostraban señales positivas, algo había cambiado.

Se trató de una coyuntura crítica en la que confluyeron diversos fenómenos. Este cambio no se presentó como una crisis, sino como un desgaste, que reduciría sensiblemente el crecimiento de la economía,

con una composición sectorial semejante a la de los noventa (ver capítulo 3). Como se puede ver en el capítulo 5, la etapa más dinámica de expansión del empleo y suba de salarios había llegado a su fin, y los pilares de los superávits gemelos empezaban a agotarse. Es decir, un momento económico interno significativo: sin cambios estructurales en la distribución del poder del capital, el ciclo de expansión con distribución del ingreso progresiva se estancó.

De manera contemporánea, estalló en 2008 una nueva crisis mundial, con epicentro en los países centrales. Desatada en el mercado inmobiliario, la crisis se desplegó rápidamente por el resto de las finanzas, sumamente intrincadas en inversiones cruzadas de dudosa legalidad. Este efecto no tuvo impacto inmediato para Argentina, virtualmente fuera del crédito internacional por entonces (ver capítulo 2). Incluso más, hasta 2011, los capitales financieros refugiaron sus posiciones en torno a los bienes que consideraban más seguros ante la incertidumbre, los *commodities*, lo que impulsó un último incremento de sus precios internacionales, favoreciendo a la región. Los gobiernos de los países centrales desplegaron mayúsculas políticas de expansión monetaria para salvar a los bancos, pero sin iniciativas para remediar los fundamentos del problema, ligados a la baja remuneración de la población asalariada y la creciente desigualdad. Esto inauguró una fase de muy bajo dinamismo en la demanda de los países centrales, que impactó en una paulatina desaceleración de las compras de productos extranjeros.

Sin embargo, estos elementos económicos no aparecen como determinantes claves de la inflexión de 2008, sino como contexto (ver capítulo 2). Lo que marcó el quiebre fue el conflicto netamente político del gobierno nacional con las patronales del agro en marzo de 2008. Este verdadero “parteaguas” en la política argentina fue desatado a partir de la decisión del gobierno nacional de modificar las alícuotas impositivas de los derechos de exportación sobre cereales y oleaginosas, a través de un esquema móvil que se ajustaría en relación a las variaciones de los precios internacionales de estos productos –en particular, de soja, girasol, maíz y trigo–.

La Resolución N° 125 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a cargo de Martín Lousteau, modificaba así el régimen impositivo a partir del 12 de marzo de 2008. Enmarcada en la tendencia general al alza pronunciada de los precios de algunos productos agrícolas –en particular, soja y sus derivados–, la preocupación del gobierno pasaba por lograr un impacto menor sobre los precios domésticos de estas subas en los precios internacionales y, al mismo tiempo, favorecer la apropiación estatal de los ingresos considerados extraordinarios (para su redirección hacia transferencias económicas, pagos de deuda y po-

lítica social, en ese orden).

El llamado "conflicto del campo" mostró que este sector del empresariado lograba activar ciertos núcleos del sentido común que le permitirían disputar la hegemonía neodesarrollista, tomando como representante de la misma a su enunciador privilegiado: la fuerza política devenida en kirchnerismo. Es sólo a partir de esta confrontación que el kirchnerismo se convirtió de una fuerza de gobierno en una identidad política que reactivaba algunas de las fibras de la tradición nacional popular. Sin embargo, debemos avanzar en el análisis de la dinámica socio-política por la cual llegamos a la consolidación de dos bloques: uno oficialista y otro opositor.

Características del BeP

Ya en los meses previos al conflicto agrario, desde fines de 2007, los referidos representantes del agro comenzaron a instalar temas de agenda (o sintagmas) que ponían en tela de juicio la política económica impulsada por el gobierno nacional, en un marco en el cual la incertidumbre acerca de las limitaciones del patrón de acumulación se tornaban verosímiles para amplios sectores de la población: aceleración inflacionaria, reducción del superávit comercial, desaceleración del crecimiento, incrementos salariales que consideraban desmedidos, costos de la energía, eran algunos de los puntos cruciales.

Este nuevo contexto de enunciación, marcado por las limitaciones en el patrón de acumulación y el recambio presidencial, fue una caja de resonancia para las demandas y discursos críticos, por un lado, y abrió las posibilidades de constitución de un discurso alternativo viable, por otro. Una pregunta clave en este punto es: de qué manera este conflicto modificó la lógica política y diluyó –temporalmente, al menos– la hegemonía del bloque social conducido por la UIA. Esta pregunta implica, para ser más concretos, comprender a través de qué estrategias las entidades del sector agropecuario y el gran empresariado expresado en AEA, lograron desplazar del rol de enunciador privilegiado a los sectores industriales y cuáles fueron los puntos de contacto (los nodos interdiscursivos) incluidos en dichas estrategias políticas en relación a otros actores colectivos.

Una primera cuestión que vale la pena señalar para responder estos interrogantes es, como dijimos, que el conflicto entre los productores agropecuarios y el gobierno nacional fue eminentemente político. Esto no significa que los intereses económicos de los actores que participaron en la confrontación no tuvieran peso en la argumentación de las posiciones (a fin de cuentas, la apropiación de la renta estaba en el centro de la escena), sino que la dinámica que adquirió el proceso

luego de la decisión del gobierno de establecer el nuevo régimen tributario estuvo marcado por la creación de fronteras discursivas y lógicas binarias, es decir, por discursos adversativos o lógicas propias de “lo político”.

Por ello, resulta clave identificar, en segundo lugar, cuáles fueron las posiciones políticas que adoptaron los sectores marginados políticamente del bloque hegemónico en torno a la decisión del gobierno en el período más álgido del conflicto –que podemos ubicar entre marzo y julio de 2008–. Por el lado de los actores colectivos del sector agropecuario, la medida anunciada por el Ministro de Economía provocó un rechazo inmediato, con líneas argumentales similares a las que el sector venía desarrollando meses atrás, ligadas a “lo confiscatorio” de la medida, el desincentivo que generaba la decisión a la producción agropecuaria, el desconocimiento del aporte del “campo” al conjunto de la sociedad. Lo que comienza a consolidarse a partir de este momento es un bloque formado por las cuatro entidades más representativas de los productores (capitalistas) agropecuarios que se dio en llamar Mesa de Enlace (ME).

De esta manera, la modificación en el esquema tributario para las exportaciones del sector permitió a la SRA conducir la unificación de los diferentes actores que representaban intereses heterogéneos dentro de la producción agropecuaria. Los actores subalternos dentro del “bloque agrario” asumieron esta unidad en pos de lograr una correlación positiva de fuerzas –en un principio en un nivel netamente corporativo– frente al gobierno nacional. El gobierno intentó desacreditar el paro convocado por las entidades agropecuarias en los primeros días de protesta, apuntando a la pérdida de legitimidad de la acción a medida que se notara una escasez de productos en el comercio minorista. El gobierno nacional señalaba el carácter particular, corporativo del reclamo, que limitaría su capacidad de interpelación política a otros actores. Esta apreciación fue rápidamente desacreditada por las acciones directas que llevaron adelante los productores agropecuarios desde el 14 de marzo. A esta altura, los canales de negociación para tramitar una salida del conflicto y el nivel de politización del mismo se tornaban evidentes.

A partir de allí, la ME se constituyó en un enunciador privilegiado en la política nacional. Esta nueva posición en el campo político se logró a través de la construcción de una serie de equivalencias explícitas que le permitió trascender el simple reclamo corporativo para presentarlo como una demanda universal, y al “campo” como el *sujeto político que encarna los intereses del conjunto de la nación*. Estos dos elementos aparecen con toda claridad en el acto del 25 de mayo de 2008 en la ciudad de Rosario que tuvo como principales oradores a los cuatro referentes

de la ME. En estos discursos, frente a más de cien mil personas, los diferentes representantes de las entidades agropecuarias destacaron el carácter "universalista" de sus demandas. En particular, Luciano Miguens de la SRA afirmaba que "sin el campo es muy difícil que le vaya bien al gobierno y a todos".

Así, en este discurso irrumpe una lógica hegemónica, es decir, una idea de universalidad: el campo aparece como la parte que representa al todo, a la nación, a los argentinos, al país. Para lograr esto parten de la idea de que el rechazo a las retenciones implica aprovechar una oportunidad histórica para el país. El presupuesto ideológico detrás de esta posición, es que el "campo" es el motor de la producción en Argentina y que sólo si al campo le va bien, le va bien al conjunto de la sociedad. La apelación a sentidos comunes sedimentados respecto del pretendido bienestar de la Argentina agroexportadora (el "Granero del mundo"), repetidos en el sistema escolar basado en la historiografía liberal, sirvieron de base para que esta interpelación cobrara veloz sentido.

La respuesta del gobierno nacional fue consolidar la frontera discursiva situando a los representantes del "campo" como un sector económico privilegiado, con una impronta corporativa y oligárquica que rechazaba un proceso de redistribución más justa de los ingresos y que a su vez era responsable de un proceso desestabilizador. Consideramos que éste fue el momento la dirigencia agropecuaria modificó su estrategia de confrontación –eminentemente sectorial– en pos de una estrategia hegemónica. En los primeros días de mayo, en una carta abierta al pueblo argentino publicada por el diario La Nación, la ME expresaba con claridad que es un proyecto de país distinto el que proponen y que el suyo no es un reclamo sectorial: "Normalmente se nos denomina representantes del campo, aunque preferimos pensar que con nuestra protesta y con lo que sostenemos, estamos actuando en beneficio de todo el país". Por demás elocuente era el cierre de esta carta abierta: "*Todos somos el campo. Ponete la escarapela por el país. Ponete la escarapela por el campo*". El campo lograba una fuerte difusión desde los medios de comunicación de mayor peso y comenzaba a articular sus demandas con un espacio político-partidario opositor al Frente para la Victoria. Esta estrategia le dio un excelente resultado: en julio de 2008 la resolución 125 no logró convertirse en ley, por el voto "no positivo" del Vice-presidente Julio Cobos en el Congreso de la Nación.

En definitiva, la SRA logró desplazar a la UIA del lugar privilegiado de enunciación al interior de las clases dominantes, socavando el consenso de ese "modelo" y poniendo en tensión la legitimidad de la fuerza política en el gobierno. Los puntos nodales sobre los que se asentó la estrategia de desgaste por parte de la ME y los partidos aliados al

consenso del gobierno nacional incluía referencias al republicanismo, el federalismo, la democracia y el desarrollo. Estos elementos se presentaron por lo general, más que en coyunturas anteriores, como antagónicos respecto a las políticas del gobierno nacional. Las lógicas binarias que el conflicto instaló en nuestro país, permitió conformar un bloque opositor al gobierno con posiciones por lo general liberal-republicanas, o bien conservadoras.

La tarea de expandir sus horizontes de interpelación fue retomada por partidos de oposición (especialmente, PRO, ARI-CC y UCR), que incorporaron un registro liberal-republicano como superficie de inscripción para ordenar ese discurso. Los límites de esta interpelación al interior del propio BeP obligaron a buscar acuerdos mínimos sobre los que avanzar, entre los que la contención de las demandas populares y la resolución del frente exterior estaban en primer orden. El pedido de previsibilidad se enfrentó al propio desacuerdo sobre las reglas a establecer: el capital industrial necesitaba de intervenciones que el capital agrario se negaba a aceptar.

El proyecto con pretensión hegemónica del “campo” rápidamente se instrumentó a través de canales institucionales-partidarios de cara a las elecciones legislativas de junio de 2009. El mismo logró nuclear a un arco opositor al gobierno, sobre todo a nivel de referentes político-partidarios. Por el lado de otras expresiones del empresariado, fue precisamente el gran empresariado desgarrado del bloque productivo el que apareció vinculado directamente al proyecto liberal. AEA fue, en efecto, la expresión clave de un sector que, sin encontrarse estrictamente relacionado al agronegocio (al menos en las actividades principales de las empresas que conforman la entidad), sí encontró una oportunidad para profundizar sus demandas corporativas y, al mismo tiempo, avanzar en la conformación de una fuerza social y política que consolide un nuevo proyecto hegemónico alternativo al del Frente para la Victoria.

Las demandas corporativas de diferentes sectores del empresariado se intensificaron en 2009 en el marco de la crisis mundial, y especialmente luego de las elecciones de junio. AEA centraba, por un lado, sus demandas en el plano económico-corporativo: la necesaria reducción de costos salariales, una reforma tributaria que reduzca la presión fiscal sobre las empresas y un mayor acceso al crédito. Por otro lado, abonaba a la construcción de una alternativa liberal que tendía a poner en cuestión la forma en la que el gobierno tramitó el conflicto con el sector agropecuario, y apeló a desarrollar un “diálogo entre los argentinos”, enumerando condiciones a través de las cuales este diálogo permitiría “lograr el desarrollo económico y social”. El coloquio de IDEA fue un foro complementario en la misma dirección, donde

anualmente se acercaban las preocupaciones del empresariado concentrado a un auténtico desfile de candidatos políticos.

Resta revisar, en este punto, la actitud asumida en este conflicto por la UIA. Hacia 2008 la entidad era presidida por el metalúrgico Juan Carlos Lascurain, integrante de la lista Industriales y dirigente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Argentina, representante del sector de medianos empresarios nacionales que expresaba, hacia dentro de la organización, la postura más cercana al proyecto neodesarrollista del gobierno y su expresión política: el kirchnerismo. Fruto de ello, la entidad asumió una postura oscilante que varió de un inicial apoyo a la resolución ministerial firmada por Martín Lousteau, hacia una postura de mediación entre los polos (ME-gobierno), para defender finalmente la necesidad de poner fin al conflicto considerando los reclamos de los dirigentes rurales. Si bien la UIA mantuvo hasta 2011 una postura de apoyo al régimen político-económico, a partir de esta tensión inicial, la entidad comenzó un juego "a dos puntas", acercando posturas con el resto del BeP, en vistas a desplazar su apoyo hacia otra fuerza política, en el momento que esto fuera conveniente.

De conjunto, pues, en la coyuntura 2008-2009 se producen desplazamientos en el orden político, donde emerge otro bloque político-social con visos de construcción hegemónica, alternativa a la hegemonía del bloque "productivo" y a la fuerza política que devino en su representante (el kirchnerismo). Así, aparece una nueva dinámica política en la cual la conflictividad social y las dimensiones económicas generalmente ligadas a esta conflictividad, comenzaron a verse subordinadas a la ubicación política en relación a dos bloques que se presentaban como polos de atracción: el kirchnerista y el opositor. Esto condujo a que diferentes actores (tanto de la clase dominante como subalternos) se reubicaran en el espacio político en relación a la cercanía/lejanía de los proyectos políticos en disputa. A excepción de AEA y la ME, que mostraba una clara estrategia de abonar a la consolidación de una alternativa política liberal (y pretendidamente, republicana), el resto de las organizaciones empresariales tuvo posiciones más bien ambiguas. La UIA, debido a sus debates internos no resueltos, retrotrajo su voz a exigencias sectoriales para menguar el impacto de la crisis mundial.

La estrategia del gobierno -con diferentes componentes- se centraba en instalarse como legítimo representante de la totalidad de la comunidad política, erigido como tal a través de los mecanismos institucionales que la Constitución establece, que desarrollaba una política de orden y desarrollo frente a un grupo de corporaciones en defensa de intereses sectoriales. La presidenta explicaba su accionar validándose en las instituciones democráticas (con la Constitución como máxima referencia) y en el voto popular, una doble referencia de legitimidad,

característica del populismo, con las que no contaban sus interlocutores. Debe notarse, además, que, a pesar de las acusaciones de golpismo e ilegitimidad, la presidenta no excluyó de la comunidad política a la ME, sino que los llamó a reflexionar, a recapacitar (lo cual ponía cuestionaba tratar al kirchnerismo como un totalitarismo). El eje estaba puesto en señalar el sesgo corporativo del reclamo de sectores poderosos: legítimo, pero acotado.

Se trataba de una minoría corporativa que ponía en riesgo los intereses comunes de la nación, atentando desde dentro de la comunidad política contra el bienestar del conjunto, y que, por lo tanto, el gobierno, en calidad de representante de la totalidad, tenía derecho a decidir sobre la parte. Se trazaba así una nueva frontera al interior de la comunidad política, pues ya no eran los sectores especulativos quienes representaban la amenaza neoliberal al pueblo (acorde con la cada vez mayor presencia económica y política de las finanzas como aliados del gobierno), sino las corporaciones que defendían ambiciones particulares y atentaban contra el todo, poniendo sus reclamos por encima de los intereses de la Patria.

Sintéticamente, en el período 2008-2011 hubo al menos dos movimientos de peso en el escenario económico y político de Argentina. Por un lado, la fuerza política en la dirección del Estado se erigió como uno de los enunciadores privilegiados de la agenda pública y fue, en buena medida, el actor con mayor iniciativa en el sostenimiento de la hegemonía neodesarrollista, bajo una nueva clave para generar la polarización del espacio político nacional. Por otro lado, las fracciones desgarradas del BeP (desplazadas políticamente, pero fortalecidas en la dinámica de acumulación de capital), plantearon una serie de demandas sectoriales que poco a poco dieron carnadura a un proyecto alternativo con visos hegemónicos.

A partir de este momento, el gobierno adoptó una serie de decisiones mediante las cuales logró interpelar a nuevos actores, incluyendo sectores sociales previamente no organizados (con importante peso de la juventud). El éxito de esta empresa estuvo asociado a una exacerbación del ideario nacional-popular, que si bien ya era una pieza importante en el juego político, solo desde la coyuntura post 2008 ganó lugar como parte de la conformación identitaria propia del kirchnerismo. Mediante el recurso de esta tradición se ordenaron post hoc las políticas públicas de corte progresista, pasando así de la hegemonía neodesarrollista forjada a inicio del proceso hacia la construcción de una primera minoría, más intensamente identificada (afirmada en la particularidad, distinguida de otras fuerzas). Esta clave impulsó una mayor autonomía relativa del Frente para el Victoria y, en el mismo movimiento, se ubica así mismo como un proyecto por encima de las

demandas corporativas sectoriales del empresariado (pero también de los trabajadores), por tanto, como representante de la comunidad política toda.

La primera intervención de peso en este sentido fue la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) en 2008, uno de los legados estructurales neoliberales de mayor peso – no solo por la cuantía del negocio, sino por su peso simbólico. Esta medida era una vieja demanda del conjunto de las organizaciones subalternas: incluso antes del anuncio el sindicalismo oficialista expresaba su apoyo a cualquier decisión en la dirección de recuperar el sistema jubilatorio. Veamos aquí dos efectos analíticamente diferenciados de esta medida: uno económico y uno político. Respecto del primero, en torno a la disputa al interior del BeP, del sistema previsional saldrían los fondos para financiar las políticas de contención de la crisis mundial, entre las que se pueden mencionar: el Programa de Recuperación Productiva (REPRO, vigente desde 2003 pero intensificado en esta etapa), que estableció subsidios directos a las empresas, pagando parte de los salarios de sus empleados, el Régimen para la Regularización de Relaciones Laborales y Promoción para la Incorporación de Nuevos Puestos de Trabajo (ley N° 26,476), y el Programa de Inserción Laboral en el Sector Privado, que financiaba parte de los salarios a las empresas que contrataran beneficiarios de seguros administrados por el Ministerio de Trabajo.

Quizás más marcado haya sido el efecto político, que permitía a la presidenta destacar la medida como un cambio “estructural en relación al neoliberalismo”. En este sentido, Cristina Fernández interpelaba con este cambio a una dimensión política clave del ideario nacional-popular: la distribución de ingresos. A través de este elemento, el gobierno podía plantear una polarización muy efectiva de tipo “proyecto nacional popular versus neoliberalismo”. Con esta iniciativa, la presidenta ubicó con claridad el proyecto de los partidos opositores y las “corporaciones” como aquellos que quieren “volver al pasado”, al “infierno de la crisis”. En el mismo sentido, frente a este bloque opositor, el momento estatal aparece como espacio por excelencia donde se inscribe la política como oposición a lo “corporativo”, lo estatal como universalidad. Así, el Estado aparece como “reparador” de los daños provocados por ese lamentable pasado neoliberal, así también como la más cabal expresión de los intereses de la sociedad toda.

A través de esta estrategia, el gobierno entabló un diálogo más estrecho con organizaciones subalternas, promoviéndose ya no solo como una gestión estatal que da respuesta a sus demandas, sino como el “proyecto político” de estas clases. Es decir, la tramitación de la demanda desde el poder estatal no se limitó sólo a lo burocrático-admi-

nistrativo, sino que intentaba generar una equivalencia entre justicia social-intervención estatal, y marcar una frontera discursiva con otros proyectos que negaban dicha equivalencia. Veremos los efectos en relación a las clases populares en la siguiente sección.

Las múltiples intervenciones del gobierno se enmarcan una iniciativa integral para reimpulsar un proyecto hegemónico, buscando fortalecer económica y políticamente a las fracciones del BeP que eran consideradas claves para el “desarrollo nacional”. Sin embargo, se introducía un giro donde se buscaba asociar a las fracciones líderes con otras antes desplazadas. Concretamente, las fracciones financieras serían lentamente consideradas dentro del proyecto nacional, ya no como adversarias. Una muestra relevante de este giro fue la reapertura del canje de deuda en 2010, a pedido de tres grandes bancos internacionales, como gesto de acercamiento con las demandas de esta fracción. La creciente asociación discursiva entre crédito como vía de acceso al consumo para las clases populares (ver por ejemplo el plan Ahora12) provenía del propio gobierno. No en vano, ésta fue una de las actividades que más se expandió en esta segunda etapa (ver capítulo 3), además de liderar las ganancias sectoriales expresadas en la Bolsa de Comercio entre 2009 y 2014.

En junio de 2010 se anunció la creación del Fondo de Financiamiento Productivo del Bicentenario, cuyos objetivos eran: profundizar las políticas de aliento a la inversión productiva; atender la demanda de un mercado interno en constante expansión, aprovechar las excelentes oportunidades que ofrece el mercado externo para la exportación de bienes y servicios; generar más trabajo genuino y mejor remunerado; sustituir importaciones; entre otras cuestiones. Además, se implementaron una serie de medidas de fiscales y crediticias para impulsar la industria y mejorar la producción de los sectores agropecuarios pequeños y medianos. Este Fondo se acompañó del lanzamiento de dos “programas para el desarrollo” de largo plazo: el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) y el Plan Estratégico Industrial 2020 (PEI), ambos en el año 2011.

Estos planes estuvieron más orientados a otorgar una justificación político-ideológica del proyecto de desarrollo nacional que a instrumentar medidas concretas. Esta operación se ancló sobre cuatro elementos discursivos centrales: un ideario “industrialista” que permitiría integrar en lugar de confrontar con el agro; conjugar “mercado interno con inserción exportadora” (lectura propia del enfoque neoestructuralista); aprovechando “las oportunidades que el mundo ofrece al país” para ubicar a Argentina como un líder global en agroalimentos; y el impulso a la innovación, mediante el apoyo a sectores intensivos en tecnología. Más que resolver demandas concretas o incluso

instrumentar políticas, se trató de una estrategia ideológica en la búsqueda por consolidar al kirchnerismo como identidad y como proyecto hegemónico de cierta coalición social que llevaba a la industria a la cabeza.

Las clases populares en la disputa

A pesar del problema que les pudiera representar a los empresarios que el salario se acercara a los niveles de 2001, sabían que era necesario ceder para poder contener la situación social: de lo contrario, se arriesgaban a una nueva ola de protesta social. No en vano la misma UIA reclamaba un horizonte de previsibilidad que incluyera salarios, precios y tarifas desde 2006. La entonces candidata Cristina Fernández tomó nota de este reclamo, y una de sus principales propuestas fue la de reconstruir un *Pacto Social*, algo que entusiasmó a los empresarios: ADEBA, UIA, la Cámara del Comercio, CAME y CGE se apresuraron a declarar su apoyo a esta propuesta. Ya electa presidenta, renovó este llamado en el inicio de las sesiones del Congreso en 2008, proponiendo lograr los Acuerdos del Bicentenario.

Los actores subalternos, por su parte, planteaban otras demandas desde un tiempo atrás. En particular, la *distribución del ingreso* será el macrotema más destacado tanto por CGT como por la CTA. Días antes de la asunción de la presidenta, Hugo Moyano expresaba que no iba ceder "ni un centímetro en la pelea por la recuperación del poder adquisitivo". Como estrategia para evidenciar el peso político de la CGT, al día siguiente de la asunción el secretario general dejaba claras las condiciones en que apoyaría al gobierno: "*Siempre y cuando tengamos posibilidad de mantener coherencia en la defensa de los derechos de los trabajadores, vamos a acompañar. Pero si esto no ocurre, estaremos en la vereda de enfrente*". Sin duda, la relación entre la central de trabajadores y la nueva administración caminaría por senderos más espinosos que los del gobierno de Néstor Kirchner.

Este posicionamiento de la CGT también respondía a las organizaciones patronales de cara las paritarias de principios de 2008, dado que éstas ya habían comenzado a instalar la idea de "moderación salarial" -con receptividad en el poder ejecutivo. Finalmente, la CGT aceptó la propuesta de "moderación" salarial a cambio de otros acuerdos gremiales. Siguiendo con la lógica de la CGT en las negociaciones en el Consejo del Salario Mínimo, el sindicato de Camioneros aceptó un aumento que no superaba la inflación, lo que provocó malestar general en el sindicalismo.

La CTA se esforzó por instalar el macrotema *distribución del ingreso* en el nuevo contexto inflacionario, redoblando la apuesta del pacto so-

cial. En lugar de negociar salarios por ramas de actividad (solo para asalariados formales), la central conducida por Hugo Yasky propuso en noviembre de 2007 una “gran paritaria social”, retomando los planteos del FRENAP. Algunas de las propuestas concretas de este pacto social eran la creación de un Seguro de Empleo y Formación para desocupados, una Asignación Universal por Hijo/a y una reforma integral (progresiva) del sistema tributario. En febrero de 2008 la CTA logró reunirse con la presidenta para presentarle su programa e insistir con que se le entregue la personería gremial. Aunque no hubo respuestas concretas, se valoró la apertura al diálogo y el reconocimiento de la central como actor político.

Es decir, entre fines de 2007 y los primeros meses de 2008, tanto desde el BeP como desde las clases populares, había una disputa por instalar algunos temas de agenda, que ponían en tela de juicio ciertos aspectos –hasta aquí de segundo orden– de la política económica impulsada por el gobierno nacional, cuyas limitaciones se tornaban de a poco más evidentes. Justo por ello, se hacía más fácil instalar discursos políticos sobre estas limitaciones. Como explicamos, al interior del BeP, la fracción industrial no lograba instalar un esquema estable de políticas, que garantizara no solo cierta previsibilidad –demandada por todo el BeP– sino también las transferencias que requería para sostener su valorización. La dificultad de consolidar este esquema provenía de la impugnación de las patronales del agro, cuestionando así la hegemonía neodesarrollista en ciernes. El contexto de mayor permeabilidad del conjunto de la sociedad argentina a estas demandas por cuestiones económicas –las limitaciones del patrón de reproducción del capital– y políticas –principalmente, el recambio presidencial– fueron la base sobre la que se asentó la impugnación del “campo”.

El conflicto de 2008 tensó el escenario político, y los “contendientes” forzaron un posicionamiento polar: campo o gobierno. Hubo incluso algunas organizaciones sociales que entendieron que se trataba de una revuelta popular que desestabilizaba un régimen adverso, y por lo tanto había que apoyarla. En cambio, el movimiento campesino alzó su voz haciendo notar su total relegamiento en el conflicto. Otros sectores, en particular, la mayor parte del trotskismo, no aceptó la polaridad, enfatizando que se trataba de una disputa entre capitalistas, por lo cual toda resolución terminaría en perjuicio de la clase trabajadora. Pero para un conjunto amplio de organizaciones, y, sobre todo, para amplios sectores de la población previamente no organizados, el conflicto los interpeló a tomar una posición, y eligieron la defensa del gobierno. Éste buscó resaltar el sesgo anti-democrático y anti-popular del reclamo del capital agrario, basándose en el carácter particular, corporativo, para afirmar su lugar nacional-popular, lo cual interpela-

ba otros imaginarios fuertemente arraigados.

La aparición de intelectuales (surge el nucleamiento Carta Abierta) y artistas expresando públicamente su apoyo al gobierno agregó al conflicto otra capa de complejidad, pues aparecía la necesidad de aportar a la construcción de una identidad y un relato que contenga los logros reconocidos hasta el momento de un modo coherente, operando relecciones de la historia y disputando con los grandes medios de comunicación la interpretación de la coyuntura. ¿Qué significa que la batalla fuera cultural? Lo que definía era el ámbito de la disputa política, que excedía los límites del Estado para dirimirse en las trincheras de la sociedad civil. Frente a las entidades del agro y los medios masivos de comunicación, era necesario dar una pelea que no se resolvía sólo en los votos del Frente para la Victoria contra los de los partidos de centro-derecha. El objetivo, podríamos decir, era reforzar y promover ciertos valores e ideas, asociados en términos generales con la tradición nacional-popular y cierto progresismo de los sectores medios urbanos.

A raíz de esta pelea, y debido a la sesgada cobertura de los grandes multimedios, el gobierno retomará un viejo proyecto de la comunicación popular, para dar forma en 2009 a la nueva Ley de Medios Audiovisuales (N° 26.522). El gobierno se esforzó por complementar y retroalimentar el proyecto de la *disputa cultural*. El canal estatal (antigua ATC, luego TV pública) recibió un fuerte impulso político y financiero, con un notable cambio en la calidad y proliferación de producciones propias de contenido. En 2010 se lanzó el Plan Nacional de Telecomunicación «Argentina Conectada», que incluyó la creación de nuevos canales estatales: el infantil Pakapaka (2010), el de cine principalmente nacional INCAA TV (2010), el educativo Tecnopolis TV (2011) y el de deportes DeporTV (2014), que se sumaron al ya existente canal cultural Encuentro (2007). Desde 2010, el gobierno impulsó la distribución de decodificadores de TV satelital con un paquete de 16 canales -incluyendo señales privadas- para ampliar la cobertura. Este enorme esfuerzo se acopla además a la transmisión abierta desde fines de 2009 de los partidos de las ligas nacionales de fútbol a través de *Fútbol para todos*, espacio que fue ampliamente aprovechado por el gobierno para hacer propaganda.

La estatización del sistema previsional fue otro fuerte espaldarazo en esta disputa simbólica, pues el sistema de reparto se rige por un criterio de equidad distributiva en lugar del sistema de capitalización de las AFJP basado en la rentabilidad de los aportes personales. Este efecto económico beneficia, relativamente, a los sectores de jubilados y pensionados con menores aportes al sistema. Por otro lado, la ley N° 26.245 permitió la apropiación del fondo de garantías de las AFJP en

manos de la ANSES, lo cual otorgó al Estado Nacional una suma aproximada \$85.000 millones para afrontar gastos diversos, entre ellos la inclusión jubilatoria de los no aportantes al sistema que fue una de las políticas compensatorias de ingresos más importantes del período. Con este respaldo, se creó la Asignación Universal por Hijo/a para Protección Social (AUH), que representó el programa social de mayor envergadura aplicado por el gobierno, con un carácter de corte universalista que se distinguía e los programas compensatorios previos (ver capítulo 5). Esta política otorgó una prestación no contributiva similar a la que reciben los trabajadores formales (originalmente, \$180), con un gran impacto distributivo, en especial considerando que su costo anual rondó el 0,4% del PBI.

La estatización del sistema jubilatorio financió –al menos inicialmente– la totalidad del programa con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES (aproximadamente unos \$10.000 millones), y permitió la inclusión inicial de 1.650.000 niños y adolescentes, llegando a alcanzar luego a más de 3,5 millones. Más tarde, desde ANSES se lanzaría el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), destinado a financiar créditos hipotecarios baratos, como forma de atender una muy antigua demanda ligada al déficit habitacional. Estas medidas provocaron un fuerte impacto entre las organizaciones sociales, no solo por su efecto económico, sino –especialmente y como hemos insistido– por su impacto simbólico: revalidaba la idea de un Estado presente, como salvaguarda de derechos. Otras estatizaciones, como la de Aerolíneas Argentinas o la del Correo, aunque surgen de la falta de inversores interesados ante el abandono de los propietarios, empezaron a inscribirse *post hoc* en un relato con cierta coherencia.

El conjunto de políticas públicas implementado por el kirchnerismo tuvo efectos entre las clases populares: los posicionamientos e identificaciones de diversas organizaciones se inscribieron en una clave más clara de respaldo/rechazo al “proyecto nacional”. La CGT comenzó el año 2009 con un posicionamiento de fuerte apoyo al proyecto. En el discurso enunciado en el día del trabajador, el secretario general Moyano reconoció en la convocatoria –muy masiva– el objetivo prioritario de *“defender un modelo económico nacional y popular que permitió a los trabajadores salir de la miseria a la que condujo la política de los noventa”*. Se articulaban así las propias demandas corporativas con el ideario nacional-popular que remitía a un “proyecto de país” mediante el cual “los trabajadores iniciaron un proceso de recuperación de la dignidad”. La interpretación del dirigente cegetista se inscribía en una equivalencia Estado-política, donde los “logros” del modelo fusionaban en las políticas públicas –una matriz claramente estado-céntrica. Este posicionamiento se

repetía con la Ley de Medios, trazado como una continuidad. El apoyo irrestricto, en el marco de las limitaciones estructurales a la mejora de las condiciones de vida, comenzó a tensionar fracturas al interior de la CGT, con la salida de "los gordos" y los "independientes".

La CTA, por su parte, intensificó en esta coyuntura su proceso de ruptura, inédito en su historia. En la elección interna de la central en septiembre de 2010 se presentaron dos listas: la 1, encabezada por Pablo Micheli, y la 10, con Hugo Yasky como candidato. La conformación de estas listas poco tenía que ver con demandas corporativas diferenciales o prácticas sindicales dispares: la divisoria de aguas se encontraba en las filiaciones políticas que cada tendencia expresaba. La lista 10 se ubicaba en una posición afín al gobierno desde el conflicto agrario y, definitivamente, luego de la instrumentación de la AUH que, como vimos, era uno de los reclamos que la CTA realizaba desde el 2002. La lista 1, por su parte, se posicionaba en un espacio político más difuso alrededor de la figura de Fernando "Pino" Solanas, que unificaba a vectores político-partidarios diversos -tales como, el Partido Socialista Auténtico, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Partido Comunista Revolucionario, el Movimiento Libres del Sur, entre otros-.

Si bien la central continuó impulsando una serie de demandas relacionadas a los incrementos salariales de los trabajadores estatales -su principal base social-, al reconocimiento de la personería gremial y al combate al trabajo "en negro", la efectividad política de estas demandas y de las acciones directas relacionadas a ellas no tuvieron mayor impacto debido a la fragmentación y la lógica de "competencia de aparatos" que comenzó a tomar la dinámica de la CTA desde 2010. Sin embargo, la estrategia discursiva de ambos sectores era idéntica: el intento de deslegitimación del "otro" a través de otorgar argumentos relacionados a los errores de orientar la política sindical y social en función de la filiación político-partidaria de la dirigencia. Luego de las elecciones, con denuncias cruzadas de fraude, hubo un intento de re-impulso de demandas corporativas desde la lista opositora al gobierno nacional.

Los principales temas que se pretendían instalar en agenda eran: el 82% móvil para las jubilaciones, la restitución de los aportes patronales, el rechazo del trabajo precario, los aumentos de salarios en relación a la inflación y el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. De estas demandas, sólo el aumento del mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias se convirtió en un tema de peso en la agenda pública durante el año 2011, puesto que la CGT -ya con elevados niveles de fragmentación interna- haría propio este reclamo junto a la presentación de un proyecto de ley que permitiera

la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas.

Las mediaciones que imponían los *proyectos en disputa* resultaron clave para determinar la ubicación de las organizaciones referidas en el espacio político y, al menos durante esta coyuntura, las demandas corporativas se subordinaron a estos posicionamientos. El fallecimiento de Néstor Kirchner en octubre de 2010 profundizó la polarización como marca simbólica de la constitución del espacio político nacional. En este contexto, tanto la CGT como la CTA Micheli intentaron constituirse en plataformas de nuevos espacios políticos de cara a las elecciones de 2011.

Mientras que la CGT, con Moyano como presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, jugó fuertemente en la negociación de cargos en el armado de listas del Frente para la Victoria; la conducción de la CTA se integró de manera vertiginosa al armado del Frente Amplio Progresista (FAP) –conducido por el Partido Socialista–. El fracaso de ambas estrategias se tornó evidente. Por un lado, en la disputa de cargos al interior del Frente para la Victoria, la CGT no logró obtener puestos de relevancia y un reagrupamiento de organizaciones políticas y sociales afines al gobierno –Unidos y Organizados– fue el colectivo militante que logró mayor incidencia en el armado de listas. Por otro lado, el intento que impulsaba la CTA Micheli de ocupar un espacio político “por izquierda” al proyecto kirchnerista, quedó dilapidado frente a la dinámica política binaria y a la iniciativa de la fuerza política en el poder que dejó al FAP en más de una ocasión en posiciones cercanas a expresiones partidarias liberal-republicanas (como la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical), e incluso de la centro-derecha en consolidación (el PRO).

En esta coyuntura, y a contrapelo de lo ocurrido al inicio del kirchnerismo, se produce un abandono relativo de la representación de las clases populares a través del movimiento sindical, una pérdida de centralidad del momento político-corporativo clásico. Al mismo tiempo, se forja un vínculo más orgánico entre el gobierno y lo que denominó “sectores vulnerables” dentro de las clases populares, que eliminaba algunas mediaciones representativas. Esto fue un efecto político provocado por el conflicto de 2008: en ese entonces el gobierno se propuso como representante de la totalidad de la comunidad política, frente a los intereses particulares de las “corporaciones” en general (primero patronales, pero luego también sindicales, y así). Este giro en torno a la forma de construcción política –el pasaje de las alianzas transversales a la polarización del campo político– constituye el carácter específicamente populista del kirchnerismo¹.

¹ Populismo no alude aquí a los usos liberales –que confunden con demagogia– sino en la clave posmarxista propuesta por Laclau y reelaborada en diversos estudios sobre el período.

En tal sentido, el giro de representación política puso a los "sectores vulnerables" a la cabeza no solo porque el modelo económico mostró sus límites de inclusión (capítulo 5), sino porque carecían de una organización que los aglutine como interés particular –al menos, en comparación a las centrales sindicales. Esto no significa negar la importancia de centenares de organizaciones particulares que trabajan con estos sectores sociales, sino que ninguna de ellas lograba darle una entidad clara al sujeto que representaba. Estas organizaciones, por otra parte, se veían tensadas por la misma polarización ya descrita, en términos semejantes a las organizaciones sindicales. En buena medida, este doble juego populista se tornó más consistente hasta 2011: el gobierno como representante de la totalidad de la comunidad política y, a su vez, como representante de los sectores postergados.

Más allá de estos elementos, la construcción del consenso en buena parte de las clases populares no organizadas se basó en ciertos temas y políticas no ligados de manera directa a la economía (lo cual era una forma de sortear las contradicciones expresadas en este orden). Por un lado, podemos identificar la instrumentación de nuevos derechos democráticos –ley N° 26.618 de matrimonio igualitario, ley N° 26.743 de identidad de géneros–; una reconstrucción –ya desde el gobierno de Kirchner– de las relaciones con otros países de América Latina en clave de una unidad política mayor (aparecieron diversos mecanismos de integración regional); la reincorporación durante los festejos del Bicentenario de una lectura en clave nacional-popular de la historia argentina; el avance en los juicios por los crímenes de lesa humanidad; la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por otro lado, el peso simbólico del hecho fortuito de la muerte de Néstor Kirchner en 2010 confirió un carácter en cierto sentido "mítico" (aunque limitado) al kirchnerismo como la identidad que atrajo a amplios sectores de la juventud a la participación política.

Por supuesto, el juego populista y las políticas mencionadas se vinculan con un elemento constitutivo de la tradición democrático-burguesa que el proyecto kirchnerista siempre tuvo presente: la necesidad de ganar las elecciones por mayoría. En 2011, la elección del 54% de los votos a favor de Cristina Fernández puso de manifiesto la eficacia de esta estrategia. Ahora bien, la polarización sistemática como mecanismo de construcción de una mayoría era un arma de doble filo, pues por un lado reforzaba la identificación política con el gobierno –y en el extremo opuesto, con la oposición–, dando forma a una fuerza propia, mientras que, por el otro, limitaba cada vez más la posibilidad de incorporar demandas de otros sectores, incluso cuando no fueran antagónicas. Esto impactaría en los siguientes años, como veremos en la siguiente sección.

El desgaste de la hegemonía kirchnerista

El claro triunfo de 2011 validaría la estrategia de reforzar la identificación política con el gobierno, entendiendo que lograba eficacia en la construcción de una mayoría electoral. Pero la ventaja no era solo electoral, sino de capacidad de gobierno: a diferencia de la transversalidad, que admitió asociaciones “impuras”, esta nueva fase solo promovería a propios, a convencidos, dispuestos a defender al proyecto del gobierno sin cortapisas. Pero, como señalamos, esto ponía severos límites a la incorporación de demandas de sectores –incluso cercanos o afines-. Es decir, la nueva identidad política, que retomó el impulso en clave nacional-popular, impulsaba al mismo tiempo un devenir especial respecto del polo opositor liberal-republicano, tensionando incluso a los sectores populares.

Como mencionamos, el llamado “conflicto del campo” volvió a mostrar el peso específico de la SRA y de AEA como expresiones político-corporativas del gran empresariado local, y como articuladores políticos de las iniciativas liberales. En especial después de 2011, ambas entidades avanzaron en consolidar una alternativa política al kirchnerismo. Aunque la explicación del desgaste de la hegemonía posee múltiples dimensiones, aquí sólo nos centramos en una de ellas: el desplazamiento de los enunciadores privilegiados dentro del BeP desde el bloque “productivo” (con la UIA a la cabeza) hacia los sectores desgarrados (con posiciones neoliberales o conservadoras), dando cierto crédito a las hipótesis sobre la lógica pendular de la burguesía industrial argentina.

En este sentido, desde el inicio del segundo mandato de Fernández, la posición central de AEA y la SRA destacaba la necesaria construcción de un consenso (pretendidamente) republicano para el “desarrollo del país”. Según esta lectura, el crecimiento económico y social dependía crucialmente de este consenso. Esta es la posición que ambas entidades adoptaron en temas de la agenda política que excedían por lejos sus demandas corporativas. Así, en cada una de sus intervenciones expresaron su vocación de aportar a un “cambio de etapa”, un “dar vuelta la página”. En IDEA –otro foro comandado por estas asociaciones- ya desde 2012 empiezan a definir esta estrategia, como se puede evaluar en el documento “Aportes para una Agenda Estratégica de la Argentina”. Será recién en 2015 que la propuesta de estas entidades alcanzará a definirse en una opción partidaria clara, de la mano del PRO y su figura, Mauricio Macri, en alianza con el radicalismo y la Coalición Cívica, que abandonaron su previa estrategia de diferenciación por centro-izquierda con el FAP.

Sin embargo, las posiciones de estas entidades no se distinguían demasiado de su trayectoria histórica. Cabe preguntarnos entonces

por qué estos discursos del polo opositor al gobierno nacional lograron cierta capacidad hegemónica al interior del BeP. Para ello, es necesario explicar lo que ocurrió con las posiciones de la fracción dirigente del orden neodesarrollista: la UIA.

Consideramos que hay dos aspectos clave en este sentido. El primero es que el contexto de enunciación tuvo una nueva metamorfosis ligada, centralmente, a las limitaciones de la acumulación de capital. Aunque arrastradas desde 2008, las contradicciones fueron adquiriendo mayor radicalidad desde 2012, y en especial a partir de enero de 2014. Las tensiones acumuladas entre 2008-2011 (conflicto distributivo que aceleró la inflación, estancamiento de la productividad y sus diferenciales entre sectores de actividad, bajos niveles de inversión reproductiva, elevada tasa de transnacionalización del capital) implicaron limitaciones expresadas en 2012-2015 en varios aspectos: en la balanza de pagos –con centro en la fuga de capitales y el déficit energético– (ver capítulo 2), en la distribución de ingresos progresiva (ver capítulo 5), en la dinámica de crecimiento del producto (ver capítulo 3), todas estas trabas a la reproducción ampliada del capital concentrado, que permanecía con escasos cambios respecto de años previos (ver capítulo 4).

Estos elementos permiten plantear un nuevo contraste respecto de los años inmediatamente posteriores al conflicto con “el agro”. Siempre a título de esquema propedéutico, se cambió de una *dimensión más bien política* en la determinación del orden social a una *dimensión más bien económica*. Vale enfatizar que las dificultades económicas no tenían una única interpretación, y por ende, tampoco una única propuesta de resolución: aunque giraba en torno a la economía, la disputa no dejó de ser política.

En este marco resaltamos el segundo aspecto acerca de la modificación de la postura de la UIA, donde predominó la línea interna de los grandes capitales. Fue, justamente, en la interpretación –y por ende, la resolución– de las limitaciones económicas donde se produjo la confluencia con las fracciones desplazadas y desgarradas, primando lecturas inscritas en el ideario liberal y el republicano. Respecto del primero, se impugnaba específicamente el accionar estatal en una mayor intervención sobre el propio poder económico, auto-denominados como eufemismo “el mercado”. Respecto del segundo, y dado que las tensiones específicas entre fracciones del BeP estaban lejos de estar resueltas, la propuesta clave era llevar esas tensiones a un espacio político donde no hubiera una predominancia de una única fracción, sino que se expresaran las divergencias internas: el Congreso. Por eso es que la defensa de la división de poderes reapareció como necesidad de las fracciones que buscaban dirigir el proceso. La apelación al republicanismo servía a sus necesidades concretas, no a convicciones ideo-

lógicas afines a ese cuerpo doctrinario. Contra la ilusión de respeto por la ciudadanía, vale mencionar aquí la promoción de estos actores de actitudes abiertamente machistas y racistas para denostar a la presidenta y sus seguidores: las referencias a “la yegua” y “los choriplaneos” se volvieron –lamentable- parte cotidiana de las críticas.

Como señalamos, desde 2012 la dinámica de acumulación de capital mostrará de manera explícita sus tensiones, y esto impactó también en la industria, sobre cuyas necesidades de reproducción se organizaba al conjunto del sistema. La nota saliente de la nueva coyuntura será un paulatino distanciamiento de la UIA respecto del gobierno nacional, movimiento homólogo al clásico péndulo descrito por Guillermo O’Donnell, de acuerdo con el cual luego de una expansión de la industria y una mejora en la distribución de los ingresos, las mismas fracciones industriales tienden a articularse con el bloque del gran capital transnacional y agropecuario. Esto ocurre en un contexto en que los crecientes límites ponen sobre la mesa una disyuntiva cuasi-inexorable: los costos de la superación de las tensiones los asumen las clases dominantes en un proceso de radicalización social en clave popular, o bien los asume el conjunto de las clases subalternas en un proceso regresivo.

El gobierno nacional pretendió eludir la disyuntiva, tratando de disciplinar la lógica de valorización del capital, sin cuestionar su lugar central. Con esto estamos señalando que el kirchnerismo evitó un proceso de radicalización, tratando de convencer al BeP –o al menos a la fracción que representaba- que sostener el régimen existente era mejor opción que reemplazarlo. Naturalmente, esto intensificaba las tensiones, pues las fracciones de la clase dominante no encontraron atractivo que se intentara “reeducarlas”. Por un lado, en los discursos oficiales, la presidenta insistiría hasta el final con que “los empresarios han ganado como nunca lo hicieron en otras épocas” –según dijo en el acto por el 9 de julio de 2015-. A cambio, les reclamaba cierto compromiso social, expresado en inversiones y creación de empleo.

En este afán, incluso se acercaban posiciones con el capital financiero, antes desplazado, impulsando no solo reaperturas de canje (2010 y 2013) o pagos ante tribunales extranjeros por juicios dudosos (CIADI), sino que se realizaba el rol de las finanzas en la construcción de ciudadanía: el crédito como motor de inclusión a través del consumo, que a su vez fomentaría la producción y a través de ella, el empleo (esto es visible, por ejemplo, en el plan Ahora 12). Por otro lado, se sucedían diferentes políticas que buscaban reencauzar las ganancias en ese sentido, en especial, restringiendo las formas de salida a través de la balanza de pagos (ver capítulo 2). El gobierno insistía –infructuosamente- en explicar al conjunto del capital concentrado que la única

forma de conseguir previsibilidad era pagando el costo de legitimar el régimen. Pero esto solo radicalizó aun más las demandas de los capitales más internacionalizados.

En esta tensión por la resolución de los límites a la dinámica de acumulación de capital, cabalgan las posiciones de la UIA oscilando entre demandas económico-corporativas y otras que aparecen como ideológico-políticas. El tema central que articuló las demandas de la industria era la baja competitividad como resultado de elevados costos de producción. Pero más que una impugnación completa del "modelo", aparecían como propuestas de "sintonía fina" para resolver la presión sobre los costos industriales. Y aunque este tema se mantenía dentro de los límites discursivos que el propio gobierno planteaba, al reconocer que el tema clave era la estructura de costos, las demandas de la industria se acercaban a las de AEA, SRA y el sector financiero.

Dentro de este tema, uno de los tópicos más reiterados era "la cuestión energética". Hacia 2011, luego de décadas de autoabastecimiento, Argentina pasó a depender fuertemente de las importaciones para cubrir sus necesidades energéticas. La creciente demanda de combustibles –ligada al crecimiento sostenido que incluía a la industria, que hace un uso intensivo de la energía-, chocó con una producción menguante debido a la falta de inversión en exploración y la extracción indiscriminada. La lógica de saqueo que gobernó el sector de hidrocarburos desde su privatización se consolidó por la falta de una política activa hacia este sector durante los primeros años de gobierno kirchnerista. Ante esta situación, tras años de infructuosos intentos por impulsar capitales nacionales en el sector, la presidencia de la Nación resolvió en 2012 comprar el 51% de las acciones de YPF, manteniéndola como sociedad anónima.

Esta nacionalización es expresiva de las contradicciones ínsitas del kirchnerismo: tratándose de una medida de un fuerte contenido simbólico –la expansión histórica de YPF se asocia incluso al poblamiento del territorio, así como su privatización fue el epítome del desguace estatal-, convocó enorme apoyo político; pero a un mismo tiempo, se compensó cuantiosamente a los capitales españoles responsables del vaciamiento, y se evitó la estatización –que sometiera la empresa al escrutinio público-, permitiendo la expansión a través de un modelo corporativo de alta financierización y transnacionalización, listo para invertir en la explotación de reservas no convencionales, con fuertes impactos socioambientales (el contrato con Chevron para explotar Vaca Muerta es expresivo de todos estos sesgos). Aunque con algunos reparos, la UIA apoyó esta política, típicamente enmarcada en una orientación neodesarrollista, al mismo tiempo que establecía un punto de contacto con el resto del BeP al cuestionar "el respeto a las

normas” y “la seguridad jurídica”, puntos de apoyo de los reclamos de SRA y AEA.

El segundo tópico relevante para la UIA era la reducción de los “costos logísticos”. En particular, aquellos vinculados al transporte de bienes intermedios y finales, que constituyen otra de las variantes clave para atacar la caída de la competitividad internacional y los márgenes de rentabilidad. Al igual que en el caso del acceso a energía barata, este problema es directamente vinculable a la política neoliberal consolidada durante el menemismo, época en la cual el ferrocarril sufrió un marcadísimo retroceso.

Por último, el costo salarial era el último nodo sobre el cual se asentaron las articulaciones discursivas del plano económico-corporativo entre la UIA y las demandas del sector que representan AEA y la SRA. De acuerdo al sector más liberal al interior de la UIA, los costos salariales eran el elemento clave, aunque reconocían que quizás también el más delicado en términos políticos. En un intento de solucionar este ‘problema’ con cierta “cintura política”, la UIA demandaba la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias como un mecanismo que permitiría un incremento salarial para la fuerza de trabajo asumiendo ese costo el erario público. Las paritarias por rama de actividad permitían moderar las expectativas sindicales, sobre las cuales el sector empresarial insistió en su vieja demanda de asociar variaciones salariales a cambios en la productividad.

Estas posiciones en relación a la estructura de costos se fueron acentuando, y a mediados de 2014 la entidad empezó a mostrar una distancia considerable con los análisis oficiales sobre el crecimiento industrial, la creación de empleos, los mercados de exportación y la sustentabilidad del “modelo”. En el plano político-ideológico, ya hacia fines de 2013 se produjo la diáspora de dirigentes de la UIA hacia diferentes espacios político-partidarios: desde algunos sectores más conservadores al interior del propio Frente para la Victoria, pasando por el Frente Renovador, hasta acercamientos al PRO –y luego la alianza Cambiemos. Las dificultades para construir una interpretación y un programa capaces de contener las demandas del resto de las fracciones del BeP ponía límites a la hegemonía industrial –al menos, en su forma kirchnerista. En definitiva, no dejaba de mostrar la debilidad estructural del sector industrial ante un retroceso en el plano económico. Mientras esto ocurría, una parte no menor de las organizaciones de las clases populares (y muchas representativas de las fracciones más débiles de la burguesía local mercado internista) insistía con defender un modelo “industrializador”, “productivo”, “creador de empleo”; un modelo que su propio protagonista se rehusaba a defender.

En la construcción política de la dicotomía, a la diáspora industrial

se contrapuso la unidad y el clima festivo con que recibieron el cambio de gobierno en 2015 las entidades que expresan a los sectores más concentrados del capital, del agronegocio, de los grandes multimedios. Incluso buena parte de las empresas líderes que forman parte de la UIA se ubicaron en mayor cercanía a este bloque. A sólo un mes de la asunción de Mauricio Macri, los diferentes dirigentes de las empresas más importantes del país se reunieron con un grupo de miembros del nuevo gabinete para comprometerse a "(...) trabajar de manera conjunta con los empresarios y demás sectores, con el objetivo de mejorar el nivel de empleo, potenciar las economías regionales, bajar la inflación y mantener el poder adquisitivo de los salarios, todos objetivos orientados a lograr que haya pobreza cero y mayor inclusión en el país"².

A diferencia de los actores de mayor peso del BeP que lograron consolidar una alternativa política, en las clases populares se aceleró la fragmentación política. Esta escasa unidad política estuvo marcada por la operación ideológica del proyecto kirchnerista que tendió crecientemente a aparecer como representante de los sectores vulnerables y alejarse definitivamente de las estructuras representativas de las clases populares. En 2012 la fractura con la CGT de Moyano ya era un hecho central de la política nacional, en un contexto donde las demandas salariales comenzaban a encontrar fuertes limitaciones. Por su parte, la CTA profundizó su separación, consolidando dos centrales paralelas distinguidas básicamente por su relación con el gobierno nacional. Incluso entre los sectores empobrecidos de la clase trabajadora (desocupados/as, trabajadores/as de la economía popular, etc.), la referencia del gobierno se volvió más débil y volátil, comenzando algunos distanciamientos entre la conducción del proyecto kirchnerista (y sus organizaciones propias, como La Cámpora) y las organizaciones de base territorial de mayor inserción (por ejemplo, el Movimiento Evita).

En este sentido, entre las clases subalternas, el apoyo al proyecto kirchnerista y sobre todo a la figura de Cristina Fernández se condensó en un núcleo muy denso y uniforme, conformado por sectores medios, principalmente de las grandes urbes, cierto activismo de derechos humanos, algunos referentes intelectuales progresistas, entre otros. Esa base social adoleció de dos problemas básicos para un proyecto hegemónico: no expresaba la tradición plebeya del nacionalismo popular y no representaba una mayoría electoral estable. La negación de la re-

² Asistieron referentes de diferentes ramas de actividad, nucleados en AEA y a la vez en otras entidades empresariales: Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Carlos Miguens (Grupo Miguens), Aldo Roggio (Grupo Roggio), José Cartellone (Construcciones Civiles), Cristiano Rattazzi (FIAT Argentina); Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza), Gustavo Grobocopatel (Los Grobo Agropecuaria), Federico Braun (La Anónima) y Enrique Cristofani (Santander Río).

presentación corporativa como forma de mediación política llevó en buena medida a un giro particularista a la fuerza en el poder y, por tanto, al desgaste de su capacidad hegemónica también entre diversos sectores de la clase trabajadora. En cierta medida, ese mismo agotamiento explica el dato novedoso de la llegada al Congreso nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) -trotskismo- así como el crecimiento de otras fuerzas de izquierda a niveles sub-nacionales y al interior de diversos sindicatos.

COMENTARIOS FINALES

El presente capítulo se dio a la difícil tarea de buscar una explicación coherente del proceso histórico vivido en la Argentina posterior a la crisis de la Convertibilidad. Esta crisis, su interpretación y salida guiaron gran parte de la disputa posterior, funcionando como eje para construir diferencias. Y si bien de esa coyuntura crítica emergió un nuevo régimen, entendemos que ello no se debió a la sabiduría de líderes políticos preclaros, ni a una especie de revolución proletaria *soft*. Nuestra propuesta -que se alinea con un conjunto más amplio de estudios que buscan cruzar miradas desde la economía y la política- es que existió un recambio de las fracciones hegemónicas al interior de las clases dominantes, donde concretamente fueron los sectores industriales los que lograron estructurar no solo un nuevo conjunto de políticas públicas, sino un discurso que las contuviera con cierta consistencia interna. Y como marca específica de esta salida, aseveramos, lograron incorporar de manera subordinada demandas de una parte de las clases populares -grandes protagonistas de la caída del régimen neoliberal-, construyendo así un modo de desarrollo que convocaba consensos incluso entre quienes ocuparon posiciones subordinadas.

Esta hegemonía, apoyada en un primer momento -si se quiere- más económico, pasó a una fase más centrada en la política a partir de la confrontación con las patronales del agronegocio. Es por demás relevante comprender que la coyuntura del 2008 abrió una nueva etapa, donde se consolidó la tensión antagónica que permitió al gobierno ubicarse en el polo nacional-popular y construir desde allí lo que llamó una batalla cultural, a la que contribuyó con una serie de políticas públicas que marcarían el imaginario kirchnerista, y darían forma a una identidad política propia. El gobierno, a la vista del éxito inicial de esta operación, reforzó de manera sistemática la autoafirmación particular, quebrando alianzas y cercanías con diferentes fuerzas del campo popular.

La disputa expresaba, en el fondo, opciones entre fracciones del

LA ARGENTINA KIRCHNERISTA: ENTRE LA "DÉCADA GANADA" Y LA "DÉCADA PERDIDA".

BeP, entre aquellas que estaban disputas a pagar el costo de legitimar la acumulación, y aquellas que entendían que esto no era necesario. Pero incluso estas primeras fracciones tenían reparos en su desacuerdo con las segundas: elevar esta disputa equivalía a radicalizar sus demandas, asociándose con las clases populares ya no como subalternas, algo que escapaba a su horizonte ideológico y político.

Las debilidades de la industria como conjunto frente al poder estructural de los capitales más transnacionalizados, ubicados en ramas asociadas a ventajas comparativas (e incluyendo ciertos segmentos industriales asociados) pusieron límites a su estrategia de dirigencia. Estas fracciones, que llamamos desgarradas, se dieron a la lenta construcción de una opción política capaz de oponerse no solo desde los reclamos corporativos, sino capaz de envolver en su propio redil insatisfacciones ajenas. El discurso liberal-republicano funcionó como eje para esta tarea, finalmente victorioso con la elección presidencial en 2015 de la mano de la alianza Cambiemos. Este nuevo gobierno eliminó las contradicciones del kirchnerismo, que durante años buscó convencer a las clases dominantes que –apropiadamente reeducadas en su responsabilidad social- podrían gobernar más tiempo sin recurrentes crisis sociales y políticas. Las clases dominantes entendieron rápidamente que, en un mundo en crisis, el capitalismo nacional e incluso es una utopía demasiado costosa.

Bibliografía

- Bonnet, A. (2008): *La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001*, Prometeo, Buenos Aires.
- Cantamutto, F. J. y Wainer, A. (2013): *Economía política de la Convertibilidad. Disputa de intereses y cambio de régimen*, Capital Intelectual, Buenos Aires.
- Félix, M. y López, E. (2012): *Proyecto neodesarrollista en la Argentina. ¿Modelo nacional-popular o nueva etapa en el desarrollo capitalista?*, Herramienta-El Colectivo, Buenos Aires.
- López, E. (2015): *Los años post-neoliberales. De la crisis a la consolidación de un nuevo modo de desarrollo*, Miño y Dávila, Buenos Aires.
- Vilas, C. (2017): "Política, Estado y clases en el kirchnerismo: una interpretación", en *Realidad Económica*, N° 305, Buenos Aires.